



Santiago, 03 de septiembre de 2012

Señor
PATRICIO EDGARDO HERMAN PACHECO
Presente

En relación con su solicitud N° AJ-001P1130120 de fecha 17 de julio de 2012, en las que solicita:

- “1. Nombre y RUT de todas las Universidades privadas constituidas como corporación o fundación de derecho privado que existen actualmente en nuestro país y fecha de autorización de funcionamiento
2. Nómina de las personas naturales o jurídicas que figuran actualmente como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General, si la Universidad está constituida como corporación de derecho privado
3. Nómina de los miembros de los Directorios de la Universidades privadas que están constituidas como corporaciones o fundaciones de derecho privado
4. Razón social y RUT de las empresas y sociedades relacionadas con las Universidades privadas”.

Cabe señalar que el Ministerio no cuenta con un documento que sistematice los datos requeridos en la forma solicitada y que confeccionarlo implicaría la realización de un estudio de las escrituras públicas que han remitido dichas universidades a esta Secretaría de Estado, lo que excede el ámbito de la Ley de Transparencia e implicaría distraer al personal del desempeño regular de sus labores habituales.

Sin embargo, se han fotocopiado las escrituras que contienen información relacionada con la que solicita, las que puede pasar a retirar en la Oficina del Coordinador Ministerial de Transparencia, señor Rodolfo Herrera, en el Gabinete Ministerial del Ministerio de Educación, en Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 1371, 7° piso, en horario de 09.00 a 13.00 horas.

Por último, cabe advertir que las fotocopias corresponden a la documentación que actualmente obra en poder de la División de Educación Superior del Ministerio, proporcionada por las propias instituciones universitarias, sin que podamos tener

certeza de que reflejan la situación societaria y directiva más actual de tales organismos.

Si usted no está conforme con la respuesta o documentación recibida, le agradeceremos contactarnos a través del ingreso de una nueva solicitud, indicando el número de esta petición.

Nos contactaremos con usted dentro de las 48 horas siguientes a su ingreso, telefónicamente o a su correo electrónico.

De todas formas, le informamos que la Ley N°20.285 de Acceso a Información Pública le permite reclamar ante el Consejo para la Transparencia, iniciándose un nuevo procedimiento administrativo que resolverá ese órgano.

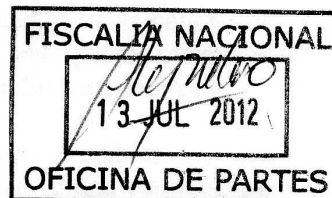
Saluda atentamente a Ud.,

Jessica Padilla Uribe
Coordinadora Minfo Transparencia
Ayuda Mineduc
Ministerio de Educación
Fono 406 68 70 – 406 69 90

FUNDACION "DEFENDAMOS LA CIUDAD"
Luz 2889, Las Condes
Teléfono: 9-2585459
www.defendamoslaciudad.cl

Santiago, Viernes 13 de Julio de 2012.-

Sr. Harald Beyer
Ministro de Educación
P R E S E N T E



REF. Lucros ilegales de universidades privadas y Ley N°20.285 de Transparencia

De mi consideración:

La Fundación que presido, se encuentra estudiando la situación producida en las Universidades privadas de nuestro país que no obstante estar constituidas como corporaciones de derecho privado sin fin de lucro, de conformidad con lo establecido en el Art. 30 de la Ley 18.962, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, se han rodeado de sociedades comerciales cuyos socios son precisamente, socios activos de la corporación o miembros de su Directorio o tienen cargos académicos directivos de alto nivel, todos muy bien remunerados.

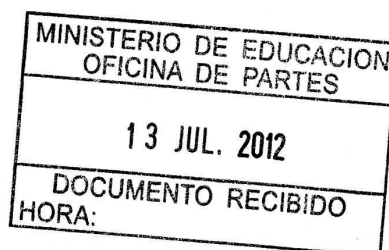
Como Ud. debe saber Sr. Ministro, las corporaciones de derecho privado a las cuales se refiere el Artículo 30 de la LOCE son de aquellas que desde el año 1857 se encuentran regidas por el Libro I Título 33 del Código Civil.

Esa disposición del Código Civil proviene de la redacción de éste por el jurista don Andrés Bello y nunca ha sido modificada sustancialmente, salvo con la actual Ley 20.500 de reciente entrada en vigencia, que mantiene el carácter sin fin de lucro de las corporaciones.

Ahora bien, las normas del Código Civil sobre corporaciones, siempre han estado reglamentadas por Decretos que han establecido a lo largo de más de 80 años, la estructura y funcionamiento de las corporaciones, siendo el último de ellos el DR 110 del año 1979 del Ministerio de Justicia, denominado Reglamento sobre personas jurídicas de derecho privado.

Es el caso que en 1980, cuando se dictó el DFL N°1, se estableció en su Artículo 15 que las Universidades privadas debían constituirse como personas jurídicas de derecho privado sin fin de lucro y que dichas Universidades se regirían por las disposiciones de esa Ley, de sus respectivos estatutos y supletoriamente, por las disposiciones del Título 33 del Libro I del Código Civil, por lo que de acuerdo al DFL 1 de 1980, las Universidades privadas sólo podían constituirse como corporaciones o fundaciones de derecho privado.

Como hemos mencionado, en 1990 se dicta la Ley 18.962 que en su Artículo 30 restringe la posibilidad de constituir una Universidad a hacerlo solo ocupando la estructura legal de una corporación de derecho privado, sin fin de lucro.



Durante todos los años que ha estado vigente la normativa ya señalada, quien ha velado porque las corporaciones y fundaciones no persigan fin de lucro, es el Ministerio de Justicia, el cual siempre ha recabado el Informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para examinar los estatutos de constitución y reforma de las corporaciones y fundaciones.

El Ministerio de Justicia y el CDE han mantenido la calidad de sin fin de lucro de las corporaciones prohibiendo, hasta el día de hoy, que los miembros del Directorio de una corporación reciban remuneración en forma directa o indirecta.

Asimismo, dicho Ministerio y el CDE han prohibido que los socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General de una corporación, sean entidades o personas con fin de lucro, de tal manera que sólo pueden ser socios las personas naturales o personas jurídicas sin fin de lucro.

En 1980 al dictarse el DFL 1 ya mencionado, se contempló en el Artículo 17 de esa disposición legal, hoy Artículo 46 de la LOCE, que los interesados en constituir una Universidad deberían depositar una copia de la escritura pública o instrumento privado reducido a escritura pública, en el Ministerio de Educación.

De esta manera se sustrajo la supervigilancia y control en la constitución y funcionamiento de las corporaciones y fundaciones que fueran el chasis jurídico de una Universidad, que tenía el Ministerio de Justicia y se las traspasó al Ministerio de Educación. Lo importante es que el DFL N°1 de 1980 y la LOCE siempre exigieron que la estructura jurídica de una Universidad fuera “un ente de derecho privado sin fin de lucro”.

A partir de 1980 el Ministerio de Educación, sin Decreto ni Reglamento alguno (sic.) empezó a autorizar que una Universidad constituida como corporación o fundación pagara remuneración a los miembros de su Directorio, o que sus socios fueran sociedades comerciales.

Hasta hoy encontramos múltiples Universidades que tienen entre sus socios activos, que eligen al Directorio, a sociedades inmobiliarias e inversionistas, las cuales adquieren bienes raíces y muebles y le prestan servicios a la Universidad en forma comercial.

El problema radica en que los dueños de las inmobiliarias e inversionistas y empresas de servicio y comerciales que atienden a las Universidades, son precisamente las personas naturales o jurídicas que son los socios activos, que en la Asamblea General de socios designan a los miembros del Directorio.

El circuito urdido es perfecto ya que quien fija las tarifas y aranceles a los estudiantes universitarios y efectúan las contrataciones e inversiones son las mismas personas que directa e indirectamente le prestan servicios a la Universidad obteniendo de ésta utilidades o ganancias.

El círculo así queda cerrado y la educación universitaria pasa a ser un perfecto holding de carácter comercial.

Lo grave es que la cara del holding, la Universidad, al tener estructura de corporación educacional está exenta del pago de IVA, de contribuciones de bienes raíces y del impuesto a la renta. Estamos entonces frente a un negocio espurio que tiene la cara visible de una entidad educacional que persigue fines altruistas que es, como lo señala la LOCE en su Artículo 31, la que puede otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos especialmente licenciado, magíster y doctor y además efectuar investigación.

No puede una entidad perseguir fines ideales como impartir, fomentar y desarrollar la educación universitaria y la investigación, si sus verdaderos controladores son entidades o personas naturales o jurídicas que buscan una utilidad o ganancia periódicamente.

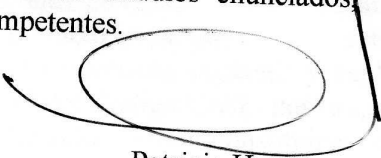
En consecuencia desde el año 1980 a la fecha, es decir, durante 32 años, a través de una excedida e ilegal medida, el Ministerio de Educación se arrogó la facultad de modificar el concepto "sin fin de lucro", precisado permanentemente por el CDE y el Ministerio de Justicia.

Ningún gobierno desde 1980 hasta hoy, reparó en esta "inteligente" desviación que hizo el Ministerio de Educación, respecto a las exigencias para que las Universidades se mantuvieran como entidades sin fin de lucro realmente y permitieron que se enquistaran en el interior de las corporaciones, personas y sociedades con fines de lucro. La Fundación Defendamos la Ciudad está terminando un estudio sobre esta materia para hacerlo llegar al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo y para ello solicitamos al Sr. Ministro nos proporcione, dando cumplimiento a la Ley de Transparencia, la siguiente información:

- 1.- Nombre y RUT de todas las Universidades privadas constituidas como corporación o fundación de derecho privado que existen actualmente en nuestro país y fecha de autorización de funcionamiento.
- 2.- Nómina de las personas naturales o jurídicas que figuran actualmente como socios o miembros activos que constituyen la Asamblea General, si la Universidad está constituida como corporación de derecho privado.
- 3.- Nómina de los miembros de los Directorios de la Universidades privadas que están constituidas como corporaciones o fundaciones de derecho privado
- 4.- Razón social y RUT de las empresas y sociedades relacionadas con las Universidades privadas.

La información que solicitamos a vuestro Ministerio es esencial para nuestra Fundación a fin de poder concluir los estudios enunciados, que oportunamente haremos llegar a las autoridades competentes.

Atentamente



Patricio Herman
Presidente

c.c. Sr. Sabas Chahuán, Fiscal Nacional del Ministerio Público, en atención a que una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados le entregó antecedentes sobre esta materia